

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL**



**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE JUSTICIA Y PAZ**

MAGISTRADO PONENTE: IGNACIO HUMBERTO ALFONSO BELTRÁN

Radicación : 11001600025320140059
Postulados : JHON FREDY CAICEDO RINCÓN, alias «*Yan Carlos*»
: CEDULO AMADO MELO, alias «*Pitufo*»
: HEIDELBERT CRISTIAN MENDOZA ANGARITA, alias «*BCB*»
Asunto : Impugnación de la contabilización del término de libertad a prueba
Acta No. : 37 / 23
Procedencia : Juzgado con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas
de Justicia y Paz del Territorio Nacional
Decisión : Confirma parcialmente

Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo dos mil veintitrés (2023)

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Corregida por la primera instancia la irregularidad advertida por la Sala, procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por las defensas técnicas de **JHON FREDY CAICEDO RINCÓN**, alias «*Yan Carlos*», **CEDULO AMADO MELO** alias «*Pitufo*» y el Postulado **HEIDELBERT CRISTIAN MENDOZA ANGARITA** alias «*BCB*», en contra del auto de 29 de octubre de 2021, proferido por el Juzgado con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, por medio del cual fijó en 4 años el término de libertad a prueba, contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la precitada providencia.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

1. El 19 de diciembre de 2018 la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, dictó sentencia condenatoria en contra de JHON FREDY CAICEDO RINCÓN, alias «Yan Carlos», exmiembro del Bloque Central Bolívar, imponiéndole la pena principal de 480 meses de prisión y multa de 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 240 meses; que suspendidos, se sustituyeron por una pena alternativa de ocho (8) años (96 meses), por la comisión de los delitos de concierto para delinquir, siete (7) homicidios en persona protegida, dos (2) desapariciones forzadas, cuatro (4) torturas, cuatro (4) desplazamientos y nueve (9) secuestros.

También resultó condenado a las mismas penas de prisión y accesoria HEIDELBERT CRISTIAN MENDOZA ANGARITA, alias «BCB», como responsable de la comisión de los punibles de: dos (2) homicidios en persona protegida, homicidio en persona protegida tentado, homicidio, dos (2) desapariciones forzadas, tortura, cinco (5) desplazamientos forzados, exacción, destrucción o apropiación de bienes, cinco (5) secuestros, ocho (8) constreñimientos y ocho (8) amenazas. Penas suspendidas que se sustituyeron por una pena alternativa de ocho (8) años.

E igualmente, CEDULO AMADO MELO, alias «Pitufo», como responsable de la comisión de los punibles de concierto para delinquir, dos (2) homicidios en persona protegida, desaparición forzada, tortura, secuestro simple. Penas suspendidas que también se sustituyeron por una pena alternativa de ocho (8) años.

2. La anterior decisión fue apelada y mediante sentencia de 3 de marzo de 2021, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, entre otras determinaciones, confirmó la referida condena.

3. El 17 de marzo de 2016, el 3 de noviembre de 2015 y el 3 de septiembre de 2019, la Magistratura con Función de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, les concedió la sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva a cada uno de ellos y en el orden

antedicho. El 17 de mayo de 2016, el 23 de diciembre de 2015 y el 2 de octubre de 2019, respectivamente, se vincularon al proceso de reintegración.

4. El 2 y 3 de agosto, y el 15 de septiembre de 2021, el Juzgado Único de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, recibió el ofrecimiento de disculpas y petición de perdón elaborados y firmados por JHON FREDY CAICEDO RINCÓN, alias «Yan Carlos», HEIDELBERT CRISTIAN MENDOZA ANGARITA, alias «BCB», y CEDULO AMADO MELO, alias «Pitufo», conforme se ordenó en el fallo condenatorio. Asimismo, esos días los Postulados suscribieron y entregaron al precitado Despacho el acta de compromiso frente al cumplimiento de las obligaciones impuestas en la sentencia.

5. El 7 de mayo de 2021 el Juzgado de Ejecución de Sentencias de esta especialidad, avocó el conocimiento de la vigilancia de la pena impuesta en esta jurisdicción.

6. El 29 de octubre de 2021, se llevó a cabo audiencia en la que ese despacho les fijó el término de la libertad a prueba por cuatro (4) años, contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de ese proveído, para lo cual deben suscribir diligencia de compromiso en los términos que señaló. Todo, en atención al cumplimiento de los presupuestos del inciso 4° del artículo 29 de la Ley 975 de 2005. Providencia notificada en estrados.

7. La defensa técnica de CEDULO AMADO MELO, alias «Pitufo», manifestó¹ que apelaba la decisión. Ello para que se tuviera en cuenta el tiempo que permaneció privado de la libertad y seguidamente señaló, que por el término que refirió el Juzgado de la ejecutoria de la decisión adoptada. El Defensor de JHON FREDY CAICEDO RINCÓN, también se pronunció en similar sentido².

¹ Segunda grabación de audio y video de 29 de octubre de 2021, récord. 49:19

² Tercera grabación de audio y video del 29 de octubre de 2021, récord:1:44.

8. El Postulado HEIDELBERT CRISTIAN MENDOZA ANGARITA, alias «BCB», señaló³, que no estaba conforme con la decisión y por tanto la apelaba.

9. El 3 de noviembre de 2021 la Secretaría de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá repartió la apelación a este Despacho y mediante providencia del 25 de enero de 2022, se declaró la nulidad de lo actuado a partir del momento en que se impidió al Defensor Público de CEDULO AMADO MELO la sustentación del recurso de apelación interpuesto contra el auto apelado.

10. En audiencia llevada a cabo el 2 de marzo de 2022, el Juzgado de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, subsanó las irregularidades advertidas por el Tribunal, para lo cual concedió el uso de la palabra en su orden, al Defensor de CEDULO AMADO MELO y al Postulado MENDOZA ANGARITA⁴, con posterioridad al de CAICEDO RINCON y a los no recurrentes. Acto seguido, concedió los recursos de apelación interpuestos.

III. DECISIÓN IMPUGNADA

Mediante providencia de 29 de octubre de 2021 el Juzgado de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional fijó en 4 años⁵ el término de libertad a prueba a JHON FREDY CAICEDO RINCÓN, alias «Yan Carlos», CEDULO AMADO MELO, alias «Pitufo» y a HEIDELBELBERT CRISTIAN MENDOZA ANGARITA alias «BCB», contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la precitada providencia.

El sustento de esta determinación estribó en la aplicación del precedente horizontal y vertical. El primero, por cuanto desde su creación legal esa Judicatura siempre ha aplicado el mismo criterio en los casos en los que ha ejercido vigilancia. Y el segundo, porque la Sala Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en los radicados 45321 de 16 de diciembre de 2015 y

³ Tercera grabación de audio y video del 29 de octubre de 2021, récord 3:44.

⁴ Segunda grabación de audio y video del 2 de marzo de 2022, récord 24:55 delegó a su Defensor Público para tal efecto.

⁵ Equivalen a la mitad de la pena alternativa impuesta.

47209 de 5 de octubre de 2016, señaló que este derecho no se adquiere de manera automática con el paso del tiempo, como sucede en la jurisdicción ordinaria, dado que en el proceso especial de Justicia y Paz es necesario comprobar el cumplimiento de los deberes de contribución a la reparación integral de las víctimas por parte de los postulados, así como las obligaciones impuestas en el fallo transicional, que justamente verifica el juzgado de ejecución de sentencias en las audiencias de vigilancia.

Advirtió el *a-quo*, que la Sala de conocimiento de Justicia y Paz de Barranquilla en autos de 23 de junio y 21 de julio de 2020, en el proceso 08-001-22-52-002-2013-80003, aplicó el precedente de la referida alta Corporación.

IV. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN E INTERVENCIÓN DE LOS NO RECURRENTES

1. Impugnación

La defensa técnica de JHON FREDY CAICEDO RINCÓN, alias «*Yan Carlos*», interpuso recurso de apelación² contra de la decisión del Juzgado de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, concretamente en lo relacionado con el momento a partir del cual comienza a contabilizarse el término de la libertad a prueba, esto es, el día siguiente a la ejecutoria del auto impugnado. Fueron estos sus argumentos:

El hecho de que en todas las decisiones adoptadas por ese despacho se haya asumido que el término de libertad a prueba se contabilice como se adujo en la providencia recurrida, no legitima la determinación adoptada. Esto, en tanto que las providencias de la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla en las que el *a-quo* fundó su decisión son restrictivas, por cuanto el principio universal que debe regir es la aplicación de la postura más favorable a los intereses del postulado.

Manifestó que el Juzgado no puede convocar a una audiencia de «*definición de situación jurídica*», ya que dicha diligencia no está reglada en la Ley 975 de 2005, y menos imponer el criterio impugnado en contravía de lo que efectivamente está normado en el inciso 4^o del artículo 29 *ibídem*, que no

admite interpretación, dado que expresamente establece que el periodo de libertad a prueba se empezará a contar a partir del día siguiente del cumplimiento de la pena alternativa impuesta en la sentencia.

Apoyó este argumento, por principio de complementariedad, en el artículo 27 del Código Civil, que enseña, que cuando la ley es clara no hay lugar a interpretaciones. Dicha norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-054 de 2016. Coincidió con que no basta la simple verificación aritmética del cumplimiento de la pena alternativa para conceder la libertad a prueba, debido a que es necesario comprobar las obligaciones impuestas en la sentencia.

Sin embargo, le sorprendió que cuando inició la audiencia de lectura de la decisión adoptada, el *a-quo* dijo que su defendido cumplió los 8 años de pena alternativa y todas las obligaciones impuestas en el fallo transicional. En ese sentido precisó que, el periodo de libertad a prueba señala deberes adicionales que tienen que ver con el compromiso de seguir participando en todas las actuaciones del proceso de Justicia y Paz, empero, este es un tema diferente a los requisitos señalados anteriormente.

Hizo la salvedad que en el fallo de 11 de agosto de 2021, radicado 59710, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia abordó el tema de la sustitución de la medida de aseguramiento y arguyó que, ese alto Tribunal dijo que la pena alternativa es una condena cumplida anticipadamente, lo que significa, que en la primera sentencia parcial se acumulan los demás fallos parciales que se llegaren a dictar y se contabilizaría una sola pena alternativa y un solo periodo de libertad a prueba.

Estas razones lo llevan a colegir, que los postulados no tienen por qué asumir el tiempo que el Juzgado de Ejecución de Sentencias tarde en convocar a audiencia para definir la situación jurídica de cada uno de los acogidos al proceso, y ahí sí, si no hay recursos, contabilizar a partir del día siguiente el término del periodo de libertad a prueba, porque eso no es lo que dice la norma.

Para sostener su postura, hizo alusión a las decisiones de 25 de octubre de 2019 y 3 de junio de 2021, proferidas por esta Sala de Justicia y Paz⁶, en las que, sin necesidad de hacer mayores interpretaciones, se entendió que lo único que debe hacerse es cumplir lo reglado en el artículo 29 de la Ley de Justicia y Paz.

Y continuó afirmando que, sería viable preguntarse: ¿cómo se debe contabilizar el periodo de libertad a prueba a un postulado que no está en libertad? Lo lógico sería que, la libertad deba estar materializada, conforme quedó plasmado en los referidos autos al reseñar sobre la presentación de los postulados a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) a fin de cumplir las obligaciones ante esa entidad.

En la decisión de 25 de octubre de 2019, la Sala de conocimiento de Justicia y Paz de Bogotá⁷ expresamente señaló:

«(e)sto para significar que el cumplimiento efectivo de los ocho años de privación de la libertad, entre otras cuestiones, determina no solo (sic) la sustitución de la medida de aseguramiento intramural, por una no privativa de la libertad, sino que también aplica en el conteo de la pena alternativa regulada en esta jurisdicción y por el efecto para la libertad a prueba.

(...)

Esto en virtud, como ya se dijo, a que el tiempo de cumplimiento de la pena alternativa no siempre ha de coincidir con el momento de la ejecutoria de la sentencia proferida en esta jurisdicción y este destiempo, (sic) no puede ir en detrimento de los intereses procesales de los postulados, razón por la cual dicho intervalo deberá ser acumulable al conteo respecto de la figura procesal que se invoca –libertad a prueba–.

Lo anterior, de acuerdo al contenido descrito en el inciso 4 del artículo 29 de la Ley 975 de 2005».

Reiteró que, hay una norma expresa que no admite interpretación diferente a que el periodo de libertad a prueba se empezará a contar a partir del día siguiente a que se cumpla la pena alternativa.

⁶ No refirió la radicación de la providencia.

⁷ No hizo referencia a la radicación de la providencia.

Por último, agregó que, el temor de la jurisdicción es que bajo ese entendido se extingan muchas penas y no se puedan exigir más obligaciones. No obstante, ese es un aspecto diferente y se tendrán que fijar compromisos derivados de la naturaleza de la Ley de Justicia y Paz, como el deber de contribuir con la verdad y asistir a todas las diligencias a que sean convocados. Es un temor fundado, no obstante, deriva de la simple aplicación de la ley y no es responsabilidad de los postulados.

Por tanto, pidió que como su defendido cumplió la pena alternativa y las obligaciones impuestas en la sentencia, se acoja el criterio de las precitadas providencias de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, es decir, se acepte favorablemente la postura defensiva y se honre lo que dicta la norma del inciso 4º del artículo 29 de la Ley 975 de 2005, esto es, que el periodo de libertad a prueba empiece a contabilizarse desde el día siguiente a la obtención de la libertad, que es una «*pena cumplida anticipadamente*», así no se haya dictado sentencia ni resuelto la sustitución de la medida de aseguramiento.

Con posterioridad, no adicionó argumentos en la audiencia del 2 de marzo de 2022.

Por su parte, el defensor de CEDULO AMADO MELO⁸, luego de resumir la decisión de primera instancia, argumentó que desconoce las adoptadas por el Tribunal, especialmente la del 10 de julio de 2020 dentro del radicado 2014 - 00027. En relación con la contabilización del término de la libertad a prueba señaló que, debía contabilizarse conforme lo establece el artículo 66 de la Ley 975 de 2005, esto es, a partir del momento en que el Postulado entra al programa de la ARN, requisito obligatorio que establece la normatividad y que, en este caso, delimitará el momento en el cual se da como tal su proceso de reintegración o resocialización a la vida civil.

Continuó refiriendo que esta decisión fue ratificada por varios autos⁹ que han sido unánimes al señalar que, el proceso de Justicia y Paz tiene unas determinadas etapas y en este caso, la decisión del 27 de septiembre del año

⁸ Récord 2:34 de la 2da Grabación del 2 de marzo de 2022.

⁹ Relaciona los siguientes: Del 11 de agosto de 2020 dentro del radicado 2014-00027, del 3 de junio de 2021 en el radicado 2007-83019 y 2 autos emitidos el 27 de septiembre de 2021 dentro del mismo radicado 2001-00311.

2021 en el radicado 2001-00311 con ponencia de la H. Magistrada Valencia Molina, señaló lo siguiente:

“El lapso referido de la libertad a prueba deberá empezar a contarse una vez el postulado:

1. Haya cumplido los años de pena alternativa.
2. Le sea sustituida la medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad.
3. Se reincorpore a los programas reseñados para su reintegración dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de su libertad”.

Adujo que, esa posición está acorde con los principios de la Ley de Justicia y Paz, en torno al proceso de reintegración y reincorporación de los postulados. Por el contrario, consideró que, la decisión del *A quo* atenta contra los derechos de los postulados debido a que su situación jurídica se tornaría indefinida. Indicó que esos argumentos son similares a los salvamentos de voto de la H. Magistrada Doctora Hernández Roa, de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz de Bogotá en punto a este tema, donde incluso se indicó que hasta que exista un fallo definitivo, no parcial, dentro del proceso transicional, es que debe concederse la libertad a prueba.

En relación con CEDULO AMADO MELO, resaltó que cumplió con todos los requisitos para acceder a la libertad a prueba; no solo con la suscripción de la diligencia de compromiso, sino con la presentación de las excusas públicas que fueron aceptadas por el Juzgado e ingresó a la ARN el dos de octubre de 2019. Pese a ello, tan sólo hasta el 29 de octubre de 2021 -dos años después- se realizó la audiencia para la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley por parte de la primera instancia. Entonces se interroga: ¿Qué pasa con esos dos años que transcurrieron? ¿Se tienen en cuenta o no?

Continuó afirmando que, en caso de que no se tenga en cuenta ese lapso, AMADO MELO estaría supeditado casi al cumplimiento de 4 años de más, sumando el tiempo que el Juzgado se tomó para la valoración del cumplimiento de los requisitos. Lo que, en su sentir, contraviene el artículo 29 de la citada normativa que refiere que, una vez cumplidas las obligaciones y

transcurrido el periodo de prueba se declara la extinción de la pena principal. Entonces, para el caso, como el 2 de octubre de 2019 ingresó a la ARN y ha venido cumpliendo con el programa, cualquier morosidad en el trámite, no puede ser atribuida al Postulado. Contrario a ello, se entiende que es a partir de esa fecha que inicia el conteo del periodo a prueba, que finalizaría en el año 2023, época en la que deberá declararse la extinción de las penas. Sin que ello implique que se deslinde de las obligaciones del proceso de Justicia y Paz.

A su vez, el defensor de HEIDELBERT CRISTIAN MENDOZA ANGARITA, a quién éste como apelante le concedió el uso de la palabra¹⁰, manifestó que, él cumplió a cabalidad con las obligaciones impuestas en la sentencia, pues participó en actos de solicitud de perdón según se ordenó en el numeral 150 de la parte resolutive de la sentencia parcial transicional y también se vinculó a la ARN donde cumplió los compromisos respectivos de acuerdo con lo reseñado en el artículo 66 de la Ley 975 del año 2005.

Aunado a ello, la Defensa manifestó que HEIDELBERT CRISTIAN sigue en el camino de su reinserción social, y considera que debe tomarse como punto de partida para contar el término de la libertad a prueba, el 3 de noviembre de 2015, fecha en que se le sustituyó la medida de aseguramiento e hizo entrega de las coordenadas de dos fosas comunes en cumplimiento al compromiso con la judicatura y las víctimas de los postulados de verdad, justicia y reparación.

Por ende, consideró que no se debe contar para MENDOZA ANGARITA el término en mención a partir de la ejecutoria de la providencia impugnada, sino desde el 3 de noviembre de 2015. Esta postura en su sentir, encuentra respaldo en la decisión de este Despacho del 20 de octubre de 2021, donde precisamente se señaló que, para tales efectos, debe tomarse la fecha de la suscripción de la diligencia de compromiso. Lo que, según su dicho, encuentra también fundamento en las decisiones de segunda instancia del Tribunal con ponencia de los doctores Álvaro Moncayo Guzmán y Alexandra Valencia Molina, que fueron citados por su antecesor.

Razones por las cuales, se aparta de la decisión de primera instancia.

¹⁰ Récord 24:55 de la 2da Grabación del 2 de marzo de 2022.

2. No recurrentes

2.1 La Fiscal 108 Seccional en apoyo de la Fiscalía 47 delegada ante la Sala de Justicia y Paz señaló que no haría uso del traslado solicita sea confirmada la decisión¹¹. Con posterioridad en audiencia del 2 de marzo de 2022¹² refirió que, una vez conocidas las decisiones del Tribunal relacionadas con el tema debatido, apoya las solicitudes de los Defensores Públicos en cuando a que el término de libertad a prueba debe ser contado a partir de la incorporación de los postulados al programa de la ARN y no como lo había manifestado antes.

2.2 El representante de las víctimas¹³ pidió confirmar la providencia del Juzgado de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional. En la segunda sesión de la audiencia, únicamente arguyó que los recursos deben ser concedidos para que exista una posición uniforme sobre el problema jurídico debatido.

2.3 El delegado de la Procuraduría General de la Nación¹⁴, en la primera oportunidad, no intervino como no recurrente, pese a que se opuso cuando se le corrió traslado de la solicitud elevada por la Defensa de JHON FREDY CAICEDO RINCÓN, en lo referente a que le fuera otorgado el beneficio a partir de que el postulado obtuvo la libertad a consecuencia de la sustitución de la medida de aseguramiento¹⁵. Manifestó que comparte la postura de la primera instancia.

Posteriormente, en audiencia del 22 de marzo de 2022, cambió su postura¹⁶ tras señalar que, dada la inseguridad jurídica que se ha venido presentando por las distintas posturas sobre el tema, pues una Sala del Tribunal acogió el planteamiento de empezar a contabilizar el término de libertad a prueba desde que el Postulado se incorporó a la ARN y posteriormente, la misma Sala no salvó el voto en otra decisión donde se afirmó que es a partir de la suscripción

¹¹ *Ibidem*, récord: 30:41.

¹² Récord 31:31. de la 2da Grabación del 2 de marzo de 2022.

¹³ Récord 33:26. de la 3ra Grabación de la primera audiencia.

¹⁴ *Ibidem*, récord: 1:05:30.

¹⁵ Record 2:32:33 de la segunda grabación, primera audiencia.

¹⁶ Récord 34:04 de la 2da Grabación del 2 de marzo de 2022.

de la diligencia de compromiso, consideró importante realizar otras acotaciones.

El representante del Ministerio Público en la segunda sesión de la audiencia manifestó que, el término debatido debe empezar a contabilizarse a partir del día en que los postulados materialmente obtuvieron la libertad con ocasión de la sustitución de la medida de aseguramiento. Fundamenta su argumentación en la decisión emitida con ponencia del H. Magistrado Álvaro Moncayo Guzmán el 1 de octubre de 2020. Resaltó que, es más benéfico a sus intereses y en garantía a su derecho a la igualdad. Además, que no es viable su contabilización desde el momento en que se incorporan a la ARN porque si aún se encuentran privados de la libertad, sólo obtienen beneficios jurídicos cuando esta se materializa.

Lo anterior, porque el artículo 66 de la Ley 975 de 2005 indica que, dentro de los 30 días siguientes a la obtención de la libertad del postulado, debe iniciar el proceso de reintegración, como consecuencia de la libertad. Allí es donde empieza la libertad a prueba y debe empezar a contabilizarse ese periodo de cuatro años. Interpretación que considera *pro homine*.

Adicionalmente, puntualizó que no puede tomarse la postura del Juzgado porque lleva a que no se tenga en cuenta a favor de los postulados ese destiempo existente entre el cumplimiento de la pena alternativa, la sustitución de la medida de aseguramiento impuesta, el momento en que queda en libertad, se emita una sentencia total o parcial de condena y sea citado a audiencia para la verificación del cumplimiento de requisitos del beneficio deprecado. Este tiempo no puede ser imputado en contra de los Postulados porque no fue su responsabilidad y menos aún, someterlos a esperar la ejecutoria de la decisión para empezar a contabilizar el término aludido en su favor.

Reiteró que la parte más débil no puede cargar con la mora de la justicia, porque se les pondría en desventaja frente a los Postulados a los cuales el Estado les cumplió dentro de un plazo razonable. Argumento que infiere de la providencia con radicado AP 3483 –2021 dentro de la 59.710 con Ponencia de la Dra. Patricia Salazar Cuellar. Y lo llevan a solicitar la revocatoria parcial de

la providencia, para empezar a contabilizar el término debatido desde el momento en que los postulados obtuvieron la libertad.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con el artículo 478 del Código de Procedimiento Penal, las decisiones de los juzgados de ejecución de penas relacionadas con la suspensión de la pena privativa de la libertad y la rehabilitación son apelables ante la autoridad judicial que profirió la condena de primera o única instancia.

Con base en lo anterior, este despacho es competente para conocer la impugnación interpuesta por las defensas técnicas de **JHON FREDY CAICEDO RINCÓN**, alias «*Yan Carlos*», **CEDULO AMADO MELO** alias «*Pitufo*» y el Postulado **HEIDELBERT CRISTIAN MENDOZA ANGARITA** alias «*BCB*» frente al conteo del término de libertad a prueba, comoquiera que fungió como ponente de la sentencia por medio de la cual los precitados, entre otros desmovilizados del BCB, fueron condenados parcialmente el 19 de diciembre de 2018.

2. Metodología y estructura de la providencia

Para resolver la impugnación planteada y determinar a partir de cuándo la autoridad judicial que vigila el cumplimiento de la sentencia transicional debe contabilizar el término de la libertad a prueba, se analizará el referido instituto a la luz de la norma que lo regula y pronunciamientos proferidos por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá.

Esclarecido y determinado razonablemente el momento a partir del cual comienza a correr el periodo de libertad a prueba, el mismo se aplicará al caso concreto y se adoptará la decisión que en derecho corresponda.

De antemano se advierte, que este análisis modulará en clave constitucional el fundamento jurídico de la providencia proferida por esta Sala de decisión el 28 de octubre de 2021, radicado 2014-00103, mediante la cual se resolvió el problema jurídico bajo el criterio hermenéutico de contabilizar el término de libertad a prueba a partir de la firma del acta de compromiso por parte del postulado condenado, en punto del cumplimiento de las obligaciones impuestas en la sentencia.

3. De la libertad a prueba

3.1 Este derecho está regulado en los incisos 4º y 5º del artículo 29 de la Ley 975 de 2005 y se adquiere tras el cumplimiento de **(i)** la pena alternativa impuesta en la sentencia transicional y **(ii)** las obligaciones igualmente determinadas en el fallo condenatorio. Quiere decir, que esta garantía no surge de manera automática, sino que está precedida de la necesaria y obligatoria comprobación de los antedichos requisitos legales.

La normativa establece:

«Cumplida la pena alternativa y las condiciones impuestas en la sentencia se le concederá la libertad a prueba por un término igual a la mitad de la pena alternativa impuesta, período durante el cual el beneficiado se compromete a no reincidir en delitos, a presentarse periódicamente ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial que corresponda y a informar cualquier cambio de residencia¹⁷.

Cumplidas estas obligaciones y transcurrido el periodo de prueba, se declarará extinguida la pena principal. En caso contrario, se revocará la libertad a prueba y se deberá cumplir la pena inicialmente determinada, sin perjuicio de los subrogados previstos en el Código Penal que correspondan» (destaca el Despacho).

¹⁷ En la sentencia C-370 de 2006 la Corte Constitucional declaró inexecutable algunos apartes de este inciso. En este orden de ideas, como la consecuencia jurídica de dicha declaratoria es el retiro del ordenamiento jurídico de los presupuestos, oraciones o frases que contravienen la Carta Política, estos no se transcribieron.

Ahora bien, dadas las particularidades especiales del proceso de Justicia y Paz, es probable que el requisito cuantitativo se cumpla en tres escenarios diferentes, a saber: **a)** antes de que la jurisdicción transicional profiera sentencia (que puede ser parcial); **b)** luego de proferirse el fallo, pero previo a que alcance ejecutoria; **c)** posterior a la firmeza de la condena.

En las dos primeras hipótesis, todavía no puede hablarse ni se activa, en estricto sentido, el instituto de la libertad a prueba, pero los derechos del postulado se garantizan a través de la sustitución de la medida de aseguramiento y por vía del artículo 18A de la Ley 975 de 2005, cuando cumple en detención preventiva el tiempo máximo establecido para la pena alternativa.

Lo anterior, en manera alguna significa que, en el evento que al postulado le otorguen el sustituto de la medida de aseguramiento, posteriormente, tras ser condenado y adquirir firmeza el fallo, no sea necesario examinar si tiene derecho a la libertad a prueba; siendo indefectible para su concesión, por principio de legalidad, la comprobación del segundo requisito del inciso 4º del artículo 29 *ibídem*, esto es: el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la sentencia, función que le compete al Juzgado de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional¹⁸.

Parece evidente, en principio, que la magistratura de Justicia y Paz debe proferir sentencia y esta encontrarse en firme (acto antecedente) para que la judicatura que la vigila y ejecuta, verifique el cumplimiento del segundo requisito de orden legal, esto es, las obligaciones impuestas en el fallo (acto consecuente).

Tal aserto, pese a su obviedad y sin temor a su iteración, es necesario

¹⁸ Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 16 de diciembre de 2015, radicado 45.321. Dicha competencia funcional no es solo por virtud del artículo 32 de la Ley 975 de 2005, modificado por el artículo 28 de la Ley 1592, sino porque en la práctica no puede hablarse de libertad a prueba si el fallo por medio del cual se impusieron, tanto la pena alternativa como las respectivas obligaciones inherentes al proceso de Justicia y Paz, no ha quedado en firme.

precisarlo, pues resultaría contrafáctico, y si se quiere imposible, comprobarlo antes de emitir dicha providencia, así el postulado tenga la carga y el compromiso de honrar las obligaciones propias de la Ley de Justicia y Paz para ser aceptado, permanecer en la jurisdicción transicional y cumplir los requisitos de elegibilidad (arts. 10 y 11 *ibídem*), que justamente permiten emitir sentencia en su contra y ser destinatario de los beneficios de la alternatividad penal (art. 3 *ibídem*).

3.2 En este propósito es fundamental recordar que, este proceso especial transicional es progresivo y la verificación de la voluntad de paz¹⁹ y contribución efectiva se torna permanente y en distintas etapas del proceso, tanto administrativo como judicial, desde el inicio y hasta el final, en consideración a que es indispensable constatarla en el acto mismo de desmovilización y para la postulación por parte del Gobierno Nacional; también, en la formulación de imputación, la audiencia concentrada y, como ya se dijo, previo a la emisión de la sentencia condenatoria.

Ejemplo dicente de lo anterior, es la figura de la terminación anticipada del proceso por exclusión de lista de configurarse en el decurso procesal especial alguna de las causales previstas en el artículo 11A de la Ley 975 de 2005. De lo contrario, es decir, si solo bastara la primigenia manifestación de la voluntad de paz por parte del postulado y esta abarcara todo el trámite, el instituto de la exclusión perdería total sentido.

La misma prerrogativa y potestad progresiva se ejerce en fase de ejecución de la pena y es indispensable para mantener los beneficios, al punto que nuevamente se comprueba para la concesión de la libertad a prueba y para fijar el término de ese derecho, en tanto la ley faculta al tribunal fallador a imponer nuevas obligaciones en la sentencia, que de no verificarse en esa última etapa procesal (fase ejecutiva), inexorablemente conducen a la negación del derecho aludido y la consecuente pérdida de beneficios.

¹⁹ La resocialización es una manifestación de la voluntad de paz, pero no la agota en su totalidad.

Por tanto, de ninguna manera puede predicarse que la voluntad de paz, expresada en pretéritas fases del proceso, es suficiente para mantener los beneficios de la justicia transicional hasta el final y para el otorgamiento de la libertad a prueba en la etapa ejecutiva, ya que es factible que dicha voluntad se quiebre con el paso del tiempo, por ejemplo, contraviniendo las obligaciones asignadas en el fallo condenatorio, que de suyo, es suficiente para negar el derecho, revocarlo e incluso para expulsar al postulado del trámite de Justicia y Paz, tal como lo establece el inciso 5º del artículo 29 *ibídem*.

3.3 Tan es así, que el artículo 44 de la Ley de Justicia y Paz, modificado por el artículo 29 de la Ley 1592 de 2012, determina que en la sentencia se puede imponer u obligar al postulado a llevar a cabo los actos de contribución a la reparación integral allí enlistados. Y remata en el párrafo indicando que: «*La libertad a prueba estará sujeta a la ejecución de los actos de contribución a la reparación integral que hayan sido ordenados en la sentencia*» (destaca la Sala), lo que, como se ha venido insistiendo, solo es posible hacer posterior a su emisión y no antes (es imposible).

Esto guarda concordancia con el criterio jurisprudencial fijado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de 16 de diciembre de 2015, radicado 45.321, en el entendido que «*la concesión de la libertad a prueba no se produce automáticamente por el simple transcurrir del tiempo en el que se ejecuta la pena impuesta en la sentencia, a diferencia de lo que ocurre en el proceso penal ordinario, ya que en el trámite transicional se involucra el cumplimiento de obligaciones específicas*» (destaca la Sala), porque de cara a este instituto, «*es menester verificar el cumplimiento de los actos de contribución a la reparación integral ordenados en la sentencia y demás cargas impuestas en la misma*».

3.4 Esta consideración tampoco significa que el cumplimiento de las obligaciones y su verificación sean lo mismo y se lleven a cabo en un solo momento, en tanto lo primero es previo y emana de la voluntad y compromiso

del postulado; mientras lo segundo, es posterior y se hace en desarrollo de un deber legal de la judicatura y, por antonomasia, en un acto procesal específico.

Así, el postulado puede cumplir con las órdenes de contribución a la reparación integral, las manifestaciones de disculpas públicas e ingreso al proceso de reincorporación de la ARN, impuestas en el fallo transicional en firme, pero el Juzgado de Ejecución de Sentencias, tiempo después, hacer la respectiva comprobación.

Incluso, esta expresión voluntaria del postulado puede materializarse y verificarse previo a la emisión de la sentencia transicional, cobrando sentido la función facilitadora, de orientación y acompañamiento desarrollada por la ARN, que se convierte en insumo significativo y definitivo para la confirmación que hace la judicatura que vigila el cumplimiento de las sanciones y obligaciones del desmovilizado condenado.

Luego, es probable que el lapso entre el cumplimiento efectivo y la verificación sea prolongado, lo que puede obedecer a diversos motivos, como por ejemplo, la realización de todas las cargas funcionales asignadas al juzgado ejecutor, mismas que son interpretadas altas, si se tiene en cuenta que solo hay un despacho para ejecutar y vigilar todas las providencias dictadas por la integralidad de las Salas de Justicia y Paz del territorio nacional (Bogotá, Medellín y Barranquilla), cuyos mandatos, hechos del conflicto armado, víctimas y postulados, suelen contarse por miles, siendo diferente la situación jurídica de cada desmovilizado, pero igual de importante.

3.5 Esta hermenéutica, de suyo garantista y basada en el principio *pro personae*²⁰, permite a la Sala establecer sin dubitación, que el término de libertad a prueba no puede contarse a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia en que se fija, por cuanto puede transcurrir un periodo importante entre la expresión de la voluntad del postulado de honrar las obligaciones impuestas en la sentencia (o que se impondrán) y la verificación

²⁰ También conocido como: *pro homine*.

que hace la Judicatura que vigila el efectivo cumplimiento de los imperativos de contribución a la reparación integral y la búsqueda del fin último del Acuerdo de Paz.

De ahí que por razones constitucionales²¹, que devienen de los principios *pro libertate* y de plazo razonable, no se pueda cargar dicho tiempo (ya sea mucho o poco) a la parte más débil de la relación Estado-ciudadano, esto es, al postulado, en la medida que no está en el deber jurídico de soportarlo.

Es improrrogable, entonces, **reconocer el derecho a partir del momento en que efectivamente se adquirió, es decir, cuando el destinatario se vinculó al proceso de la ARN, dado que allí manifiesta inequívocamente su voluntad de honrar las obligaciones impuestas o que se impondrán en la sentencia**, pues tal expresión y compromiso de contribución a la consecución de la paz, solamente depende de él y no de la concreción de algún acto jurídico o formalidad de una autoridad estatal, que, se insiste, no es atribuible a aquel. Lo anterior, sin perjuicio de que el Juzgado de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz lo constate con posterioridad y de acuerdo con su agenda.

Téngase en cuenta, además, que el principio *pro personae* se sustenta y desarrolla en la prevalencia de la aplicación de la *norma* más favorable o la *interpretación* más amplia en punto de la garantía y protección de los derechos humanos, que en el análisis específico que concentra a la Sala, se compendia prefiriendo el sentido más vasto, protector y garantista de la norma concernida, esto es, se itera, **partiendo del hecho cierto e inequívoco que es la expresión de la voluntad del postulado de honrar los compromisos del Acuerdo de Paz de la Ley 975 de 2005 cuando se vincula a la ARN**; acto que, además, está precedido y amparado por el principio constitucional de buena fe (art. 83).

²¹ Es un fin esencial del Estado garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, conforme el artículo 2 de la Carta Política.

Vale aclarar, que el denotado acto de vinculación a la ARN es obligatorio, como lo afirma el artículo 66 de la Ley 975 de 2005, modificado por el artículo 35 de la Ley 1592 de 2012, y concreta uno de los fines del proceso penal transicional y especial, cual es, la reintegración particular diferenciada del postulado; cuyos requisitos, características, condiciones y obligaciones, son definidas por la señalada agencia por mandato del artículo 95 del Decreto 3011 de 2013²².

En ejercicio de esa facultad legal, la ARN estableció en el artículo 2 de la Resolución 1962 de 2018²³, la presentación personal, posterior e ineludible del postulado en el plazo perentorio de 30 días calendario, siguientes a la ejecutoria de la decisión judicial que concedió la libertad efectiva, con el fin de dar inicio al proceso y ruta de reincorporación social.

Esto permite colegir, que no basta con la sustitución de la medida de aseguramiento y/o la materialización de la libertad para comenzar a contabilizar el término de libertad a prueba, toda vez que si el desmovilizado no se presenta, se configura el supuesto de hecho para activar el parágrafo 2 de la precitada norma, es decir, informar a las autoridades judiciales y/o administrativas el incumplimiento de los compromisos del proceso de Justicia y Paz, así como de las obligaciones impuestas en la sentencia.

Por razón de ello, no es posible contabilizar el término de libertad a prueba desde el momento en que se sustituye la medida de aseguramiento y/o se materializa la libertad del postulado, por cuanto a partir de ese instante, comienza a correr para aquel el plazo ineludible de 30 días calendario para honrar el compromiso de paz estable y duradera, acudiendo de forma voluntaria a la ARN para iniciar la ruta de reintegración particular diferenciada²⁴.

3.6 De esta misma línea hermenéutica se deduce que, una cosa es la

²² Artículo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1069 de 2015.

²³ Modificó el artículo 2 de la Resolución 1724 de 2014.

²⁴ Tanto el compromiso, como presentarse a la ARN, son obligatorios.

imposición de obligaciones por parte de la judicatura en la sentencia y otra el cumplimiento de estas a partir del señalado acto del Tribunal de Paz. En otras palabras, las señaladas condiciones son propiciadas por el cuerpo colegiado para que el desmovilizado que expresó su voluntad de reconciliación, reparación y readaptación social, las materialice (acto voluntario que, como viene de verse, puede ser previo). Ante esto, es fundamental verificar la plena disposición del postulado, toda vez que este interregno o plazo no le es atribuible (no depende de él).

Ergo, se precisa ineludible establecer si es constitucional que el postulado cargue con el peso procesal y temporal que requiere: **primero**, la emisión de la sentencia que impone los deberes y permite contabilizar el término del precitado derecho; **segundo**, la firmeza del fallo; y **tercero**, la asunción del conocimiento por parte del Juzgado de ejecución de sentencias, así como la disposición de agenda y fijación de audiencia para la respectiva verificación. También, si en aplicación de principios constitucionales (como el de plazo razonable), el desmovilizado está en el deber jurídico de soportar tal contingencia o solo basta con la expresión inequívoca de su compromiso con el Proceso de Justicia y Paz, conforme se interpreta de su ingreso y puesta a disposición de la ARN para el inicio de la ruta de reincorporación.

Ante esto, la respuesta de esta Sala de decisión, en comprensión amplia, protectora y garantista de los derechos constitucionales, es que sin duda dicho término no debe ser soportado por el postulado y tal situación de aparente indefinición jurídica, debe ser interpretada a favor de las prerrogativas fundamentales a una pronta y cumplida justicia, libertad personal, buena fe y no aprovechamiento de las condiciones de superioridad por parte de la autoridad, toda vez que la confianza legítima de los firmantes del Acuerdo de Paz concretado en la Ley 975 de 2005 y de la sociedad en general, puede ser defraudada con interpretaciones restrictivas, como la que fue objeto de alzada; ya que las vicisitudes que han impedido el fortalecimiento y culminación de la investigación, juzgamiento y reparación integral de los hechos del conflicto armado interno, no son de la órbita de competencia ni de iniciativa del excombatiente que voluntariamente dejó las armas y se sometió a este régimen transicional especial.

Sin duda, es sustancial aclarar que esto es reglado y que el cumplimiento de los compromisos propios de la ley (que incluye las obligaciones impuestas en la sentencia²⁵, porque se contempla en el artículo 29 *ibídem*), debe ser vigilado y comprobado progresiva y constantemente mientras el postulado esté por cuenta del proceso especial, so pena de perder los beneficios, como por ejemplo, la alternatividad penal. Sin embargo, se enfatiza, que la facultad y deber de vigilancia por parte del Estado, no es indefinido ni indeterminado, tampoco perenne.

3.7 Esto armoniza con el contenido *iuris* fundamental del artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por cuanto la finalidad esencial de la pena de prisión en un Estado social de derecho debe ser siempre «(l) *a reforma y readaptación social de los penados*», con pleno reconocimiento del plexo de garantías fundamentales; teleología que se desestructura y trunca cuando se imponen cargas excesivas a los condenados, que en manera alguna deben soportar, máxime cuando ni siquiera fueron previstas en el ordenamiento jurídico.

Además, concuerda y se complementa con los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, adoptados y proclamados por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), mediante Resolución 45/111 de 14 de diciembre de 1990, en la medida que el No. 10 elocuentemente indica que, «(c) *on la participación y ayuda de la comunidad y de instituciones sociales, y con el debido respeto de los intereses de las víctimas, se crearán condiciones favorables para la reincorporación del ex recluso a la sociedad en las mejores condiciones posibles*».

²⁵ Que son específicas y derivan de las obligaciones generales previstas en el Acuerdo de Paz –Ley 975 de 2005–, a saber: aporte a la verdad, justicia, reparación integral y garantía de no repetición, que se concretan, por ejemplo, en una reincorporación diferenciada y eficaz del concernido. Estas, a su vez, tienen ligamen directo con los requisitos de elegibilidad y, en otras palabras, se traducen en: «(...) *continuo balance desde el momento mismo de la reincorporación del postulado a este sistema de justicia transicional*» y hasta su culminación. Cfr. Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, providencia de 27 de septiembre de 2021, radicado 2013-00311.

Luego, obstáculos de índole no legal y/o de aplicación o interpretación restrictiva, que evidentemente no acompañan ni superan una hermenéutica garantista y favorable, no solo para la persona que afronta una situación severa de privación de la libertad, sino de aquella que superó lo anterior y quiere readaptarse y reincorporarse a la sociedad, pueden traducirse como forma de discriminación o parcialidad, que conspirar contra los principios No. 2 y 11 y pueden generar consecuencias nocivas para el sujeto de derecho de especial protección, la sociedad y el Estado.

3.8 Por último, el criterio acogido sistematiza con la postura jurisprudencial de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, plasmado en la providencia de 12 de julio de 2022, radicado 61.471, que reiteró palmario que la finalidad constitucional de la pena de prisión es la resocialización como garantía de la dignidad humana, pues debe ser vista más allá de un trivial y simple castigo, y se hace presente en las distintas etapas del proceso penal, siendo que, «*en la fase de ejecución de la pena, ésta debe guiarse por las ideas de resocialización y reinserción sociales*²⁶». Dicho razonamiento fue tomado de la sentencia de tutela STP15806-2019, radicado 683.606, emanada del mismo máximo tribunal.

Así, se cristaliza la intención de la justicia transicional que, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, busca hacer un tránsito pacífico de la guerra a la convivencia pacífica duradera (y de las dictaduras a las democracias), evitar la repetición de hechos vulneradores de derechos humanos y reconstruir el tejido social afectado tras largos años de desestructuración por y como consecuencia del conflicto armado; con el propósito último y loable de hacer realidad la reconciliación nacional.

Virtud que, oportuno es resaltarla, tuvo en cuenta el Estado al inspirar la negociación y los acuerdos en la facilitación de los procesos de paz y la

²⁶ Claus Roxin, “*Culpabilidad y prevención en Derecho Penal*”, Traducido por: F. Muñoz Conde, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1981, p. 47.

reincorporación individual, colectiva y condicionada de los miembros de los GAOML; materializando y concretando el contenido trascendente del derecho a la Paz del artículo 22 de la Constitución Política que, a su vez, dio frutos en la Ley 975 de 2005, dando paso al proceso especial y excepcional que hasta hoy ha permitido, con grandes esfuerzos y ciertas dificultades, que los destacados fines sean realidad; dato fáctico, tal vez, subvalorado en la actualidad, pero cimiento y modelo en el ámbito doméstico y foráneo en los venideros días.

4. Caso concreto

4.1 En el caso puesto a consideración de la Sala, se parte del hecho que **JHON FREDY CAICEDO RINCÓN**, alias «*Yan Carlos*», **CEDULO AMADO MELO** alias «*Pitufo*» y **HEIDELBERT CRISTIAN MENDOZA ANGARITA** alias «*BCB*», satisficieron los presupuestos para la concesión de la libertad a prueba previstos en el artículo 29 de la Ley 975 de 2005, esto es, **(i)** pagaron la pena alternativa impuesta por este Tribunal en la sentencia de 19 de diciembre de 2018 y **(ii)** cumplieron las obligaciones determinadas en el precitado fallo.

Tal verificación la hizo el Juzgado de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional en el auto de 29 de octubre de 2021 y no fue objeto de apelación. Por tanto, atendiendo el principio de limitación, este aspecto no será analizado y se entienden superados los requisitos de orden legal.

4.2 Así las cosas, el examen se contrae a establecer el momento a partir del cual debe contabilizarse el periodo de la libertad a prueba concedida a **JHON FREDY CAICEDO RINCÓN**, alias «*Yan Carlos*», **CEDULO AMADO MELO** alias «*Pitufo*» y **HEIDELBERT CRISTIAN MENDOZA ANGARITA** alias «*BCB*», que como fue expuesto y sustentado en *supra* **3.4** y **3.5**, se hace a partir del momento en que efectivamente se adquirió el derecho, es decir, **cuando el postulado se vincula al proceso de la ARN, dado que en ese acto manifiesta inequívocamente su voluntad de honrar las obligaciones impuestas o que se impondrán en la sentencia.**

En este orden de ideas, en el auto de 29 de octubre de 2021 el Juzgado executor señaló que las obligaciones impuestas en la sentencia condenatoria estaban dispuestas en el numeral 4.9 de la parte motiva y en los ordinales **OCTOGÉSIMO SEGUNDO** y **CENTÉSIMO QUINCUGÉSIMO** de la parte resolutive.

En cuanto a las enlistadas en la parte motiva, el *a-quo* determinó que estaban satisfechas y sustentó su posición en el análisis de resocialización y aprobación de los magistrados con función de control de garantías de las Salas de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores cuando otorgaron la sustitución de la medida de aseguramiento y en las actas de compromiso suscritas por los postulados ante ese despacho.

En lo que hace a las previstas en la parte resolutive, referentes al ofrecimiento de disculpas y pedimento de perdón, advirtió el *a-quo*, que los postulados remitieron escritos contentivos de lo anterior, por lo que corrió traslado a la Dirección Técnica de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) para que lo socializaran con las personas afectadas por los hechos del conflicto armado de la estructura armada a la que pertenecieron los desmovilizados y emitieran el respectivo concepto técnico, precisando, que si dicha oficina lo estimaba, debían corregirlos, previo a la publicación en un diario de amplia circulación nacional y regional. Es decir, los postulados también consumaron este compromiso impuesto en el fallo.

Adicionalmente, el Juzgado executor les recordó en el proveído impugnado, que no bastaba con la simple verificación de exigencias en esta etapa procesal y con miras a obtener el beneficio de la libertad a prueba, toda vez que su deber con el proceso de Justicia y Paz es continuar honrando los compromisos de participación y contribución con el esclarecimiento de la verdad.

Esto, evidentemente se aviene con lo planteado por la Sala en el acápite anterior, relativo a que la constatación de las obligaciones de la jurisdicción transicional es progresiva y permanente. A lo que añade, que lo mismo se predica del imperativo de resocialización a través del proceso de reintegración especial de Justicia y Paz de la ARN, ya que, si no se respetan hasta el final,

inexorablemente trae como consecuencia la pérdida de beneficios de la especialidad.

4.3 Por virtud de lo expuesto y como en este caso se logró determinar el efectivo cumplimiento de las obligaciones impuestas en la sentencia (adquisición del derecho) con la vinculación al proceso de la ARN el **17 de mayo de 2016** por parte de **JHON FREDY CAICEDO RINCÓN**, alias «*Yan Carlos*», del **2 de octubre de 2019** por parte de **CEDULO AMADO MELO** alias «*Pitufo*», y del **23 de diciembre de 2015** por parte de **HEIDELBERT CRISTIAN MENDOZA ANGARITA** alias «*BCB*», será este, respectivamente, el momento procesal a partir del cual se contabilice el término de libertad a prueba para cada uno de ellos.

4.4 Se precisa, que no es oponible el argumento de que hasta el 29 de octubre de 2021 el Juzgado corroboró los condicionamientos de la parte resolutive del fallo, comoquiera que en la decisión simplemente se les recordó y conminó a que continuaran honrándolos, so pena de perder los beneficios.

Tampoco, que los postulados acepten silentes el tiempo transcurrido entre la adquisición del derecho y la fecha en que la judicatura por decisión les reconoció la libertad a prueba, toda vez que, como se indicó párrafos arriba, estos no tienen el deber jurídico de soportar las cargas y vicisitudes que se generan por la vigilancia de las penas a un número superlativo de postulados condenados.

4.5 Conclusión

Con base en lo anterior, la Sala modificará parcialmente el ordinal **PRIMERO** del auto de 29 de octubre de 2021, proferido por el Juzgado de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, en el entendido que el término de libertad a prueba se contará a partir de la adquisición del derecho con la vinculación al proceso de la ARN, esto es, del **17 de mayo de 2016** para **JHON FREDY CAICEDO RINCÓN**, alias «*Yan Carlos*», del **2 de octubre de 2019** para **CEDULO AMADO MELO** alias «*Pitufo*», y del **23 de diciembre de 2015** para **HEIDELBERT CRISTIAN MENDOZA ANGARITA** alias «*BCB*».

VI. En mérito de lo expuesto, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR parcialmente el auto de 29 de octubre de 2021 proferido por el Juzgado de Ejecución de Sentencias de las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, en el entendido que el término de libertad a prueba se contará a partir del **17 de mayo de 2016** para **JHON FREDY CAICEDO RINCÓN**, alias «*Yan Carlos*», del **2 de octubre de 2019** para **CEDULO AMADO MELO** alias «*Pitufo*», y del **23 de diciembre de 2015** para **HEIDELBERT CRISTIAN MENDOZA ANGARITA** alias «*BCB*», de acuerdo con la motivación de esta providencia.

SEGUNDO: Devolver la actuación al juzgado de origen.

Contra la presente decisión no proceden recursos.

Notifíquese y cúmplase,


IGNACIO HUMBERTO ALFONSO BELTRÁN
Magistrado


ALEXANDRA VALENCIA MOLINA
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
OHHER HADITH HERNÁNDEZ ROA
Magistrada
Salvamento de voto

Firmado Por:

Oher Hadith Hernandez Roa
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 001 Justicia Y Paz
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5eda39985f5a718ad786f87b01bd716eab761f589d3c9b51e1e441cd47aa5943**

Documento generado en 16/06/2023 01:13:39 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>